



Poder Judicial de la Nación
CAMARA CIVIL - SALA D

■■■■■ - ■■■■■. c/ A. A. DE J. PJN Y OTRO s/MEDIDAS
PRECAUTORIAS. **Juzgado 27.**

Buenos Aires,

de 2025. PS

Y Vistos. Considerando:

En virtud de la resolución dictada el pasado 26 de agosto, se desestima la medida autosatisfactiva solicitada por ■■■■■ decisión que es recurrida por el interesado quien expone sus quejas a fojas 158/66.

En el caso, se presenta en autos el señor A. P. M. y promueve demanda contra “Asociación de Judiciales PJN”, J. O. I. T. y cualquier otro responsable, solicitando que se ordene el cese inmediato de toda difusión de contenido injurioso, calumnioso y agravante contra su persona en cualquier soporte, incluyendo redes sociales, panfletos, medios digitales, carteles y/o cualquier otra modalidad de comunicación; se disponga la eliminación y/o remoción de todo contenido difamatorio actualmente publicado en cualquier plataforma digital o física; se prohíba la futura publicación de cualquier contenido de similares características, a los fines de evitar la reiteración de daños a su honor, reputación y función judicial y se ordene la notificación de la presente medida a las plataformas digitales correspondientes (Instagram, Facebook, Twitter, entre otras) para garantizar la efectiva eliminación del contenido.

Expresa el peticionante, que el día 12 de febrero de 2024, al llegar al edificio donde desarrolla su función judicial, encuentra a modo de carteles publicitarios, afiches difamatorios en diversas áreas del uso común del inmueble, incluyendo la planta baja, ascensores y la cartelera interna del piso 10, donde se encuentra su despacho, conteniendo frases ofensivas y calumniosas.

Agrega a su relato, que posteriormente, y como consecuencia de comentarios de allegados que le habrían efectuado durante la jornada, constata que tales mensajes habrían sido



replicados en la cuenta de Instagram @dejudiciales "*Asociación de Judiciales Sindicato*" y de la cuenta personal del Secretario Adjunto de dicha asociación, el Sr. J. T., originando como consecuencia la proliferación de esos posteos, en distintas cuentas particulares de seguidores, sin perjuicio de la réplica en otras redes tales como Facebook y X.

A su juicio, conforme señala en su presentación inicial, se trataría de una campaña difamatoria que no solo impacta negativamente en su honor y reputación personal, sino que también interfiere directamente en el ejercicio de sus funciones judiciales, que asegura desempeñar "*en forma intachable hace más de 20 años*", generando -añade- una "*presión indebida*" a su persona, al personal de su juzgado y a los justiciables.

Estima, entre otras cosas, que las acciones referidas, exceden el ejercicio de cualquier derecho gremial legítimo, "*configurando hechos que pueden constituir delitos de calumnias e injurias que deben ser investigados y sancionados según la normativa vigente*", y que asegura promoverá en el momento oportuno.

En resumidas cuentas, considera que se halla ante una situación de grave afectación a su "*honor, reputación y ejercicio independiente de la magistratura, producto de una campaña difamatoria que se propaga de manera pública y sistemática en medios físicos y digitales*" y que tal situación no solo lesiona sus derechos personalísimos, sino que también pone en riesgo la institucionalidad del Poder Judicial al intentar generar presión indebida sobre sus funciones jurisdiccionales.

Afirma que, debido a que la difusión de los mensajes persiste en redes sociales y otros medios, y que su contenido sería, conforme a sus enfáticas afirmaciones, "*manifiestamente falso y agravante*"-, la intervención judicial resulta imperiosa para disponer "*la prohibición inmediata de nuevas publicaciones injuriantes, la remoción de los contenidos ya difundidos, y la prevención de futuros actos de idéntica naturaleza*", fundando su requerimiento en lo normado por los artículos 195 y 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y artículo 52 del Código Civil y Comercial de la Nación.





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CIVIL - SALA D

Cabe precisar que, posteriormente, en fecha 24/06/2025 el actor desiste de la pretensión relativa a los agravios difundidos a través de internet y/o redes sociales y requiere que se continúe con la acción emparentada a los afiches (o cualquier otro formato que no sea el digital), colocados en el edificio del Consejo de la Magistratura y de los Juzgados Federales de Primera Instancia Civiles y Comerciales, de la calle Libertad 731, de esta Ciudad.

Desde ese escenario propuesto, el juzgador evaluó la cuestión introducida en el escrito inicial y reiterada a fojas [141](#).

Del examen del decisorio impugnado se advierte que el magistrado enfoca su análisis a través de la óptica de los derechos constitucionales de los habitantes "... *de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa...*" (cfr. art. 14 de la CN). Desde otro ángulo, también se ponderó el derecho al honor y a la imagen -a los cuales alude el actor como vulnerados junto con su nombre (no como atributo de la personalidad sino entendido como su reputación o buen nombre)-, y como derechos personalísimos que tienen todas las personas humanas por su sola condición de tales.

En esa dirección, el juzgador se refiere a las características del moderno derecho de daños y alude a que una de las centrales reside en el hecho que la prevención constituye una de sus funciones esenciales, conforme con la normativa emergente de los arts. 1710 y subsiguientes del Código Civil y Comercial y que, esta función del derecho de daños asume una relevancia máxima en materia de derechos personalísimos.

Paralelamente menciona que la tutela preventiva se diferencia de las medidas cautelares por el carácter definitivo de la decisión que se dicta, y entiende que en el caso, se pretende el dictado de una medida autosatisfactiva, que procede cuando se deduce una pretensión basada en derechos verosímiles o casi evidentes, donde la urgencia de la tutela judicial es esencial.

En ese orden de ideas, concluye que las circunstancias descriptas por el juez M., no califican entre las



excepciones receptadas en el plano constitucional y convencional para el dictado de una medida de este tipo. Ello, agregó sin entrar a juzgar sobre la veracidad de las publicaciones en cuestión.

Luego, estima el magistrado que no se da en el caso ningún supuesto excepcional que amerite apartarse de la prohibición de censura previa prevista en los arts. 14 de la Constitución Nacional y 13 del Pacto de San José de Costa Rica.

Disconforme con lo decidido, el apelante considera que la sentencia se basa en afirmaciones dogmáticas y que traza un *“paralelismo con situaciones dramáticas”*, para admitir que se concede a otros lo que a él se le niega.

Remarca al respecto, que no habría en este punto un criterio unánime que permita sostener que la libertad de expresión importe un derecho absoluto, a la vez que se encuentran en juego -añade el apelante- *“derechos de alta valía como el derecho al honor y a la dignidad -por un lado- y -por el otro- el obrar de una pretensa entidad gremial que no hace cosa distinta que difamar, lo que supone un acto ilícito no amparable jurídicamente”* y que las expresiones no estarían dirigidas contra su desempeño como juez, sino que apuntaría a agresiones *“sin fundamento alguno, como persona”*.

Sostiene también el recurrente que la libertad de expresión no incluye el derecho de agraviar a magistrado alguno, y que esta libertad, de la misma forma que otros derechos, tiene límites establecidos por la ley para proteger el honor, la dignidad y el orden público.

En definitiva, estima que la interpretación que realiza el juez de grado de la Constitución Nacional y de los tratados con jerarquía constitucional, en lo concerniente a la libertad de expresión, sería incorrecta, en la medida que conduce -a su juicio- a resultados lesivos para los derechos involucrados.

Preliminarmente antes de evaluar la procedencia del agravio es del caso remarcar que, como es sabido, para decidir, no estamos obligados a analizar cada una de las argumentaciones de las partes, ni ponderar todas las pruebas agregadas, sino sólo las consideradas decisivas para la resolución de la contienda (Fallos: 144:611; 258:304; 262:222; 265:301; 272:225;





Poder Judicial de la Nación
CAMARA CIVIL - SALA D

274:113; 276:132; 280:3201; 303:2088; 304:537; 307:1121, entre otros; arts. 386 y concs. del CPCC.

Sobre el particular, la acción preventiva ha sido definida como aquélla que persigue evitar el acaecimiento, repetición, agravación o persistencia de daños potencialmente posibles, conforme al orden normal y corriente de las cosas, a partir de una situación antijurídica existente. De tener éxito, se traducirá, por lo general, en una orden de hacer o de no hacer que busca revertir o modificar la situación fáctica que genera el riesgo, la persistencia o la repetición del daño que justifica su promoción (conf. Peyrano, Jorge W., “La acción preventiva en el Código Civil y Comercial de la Nación”, pág. 20, Ed. Rubinzal Culzoni). Conforme reza la norma del artículo 1713 del CCyCN *“La sentencia que admite la acción preventiva debe disponer, a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, hacer o no hacer, según corresponda; debe ponderar los criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad”*,

En punto a ello, la normativa no establece el instrumento procesal para efectivizar el reclamo y a tal efecto se ha recurrido a diversas vías. Algunas veces se ha utilizado al instituto cautelar, invocándose la norma de clausura de dicho sistema, es decir a la medida genérica o innominada que permite disponer cualquier medida no prevista expresamente por la ley o dar a las previstas una funcionalidad diferente (conf. Peyrano, Jorge, op. cit., pág. 217, Ed. Rubinzal Culzoni).

Se advierte sobre el particular, que la finalidad perseguida por el peticionante de autos se agota en la medida misma, sin necesidad de promover otra demanda, ni de sustanciar un proceso ulterior, y por tal razón la medida se llama “autosatisfactiva”, por cuanto concluye en sí misma, a través de un trámite autónomo, que finaliza con un decisorio jurisdiccional sustancial sobre el fondo de la cuestión y definitivo.

En este orden de ideas, *“Las denominadas medidas autosatisfactivas constituyen una respuesta doctrinaria y jurisprudencial a ciertas situaciones merecedoras de tutela*



jurisdiccional urgente, que no encuadran propiamente dentro del esquema legal de las medidas precautorias, pero que han sido asimiladas a ellas como un tipo de medida cautelar genérica, a falta de regulación legal expresa en nuestro ordenamiento jurídico. Han sido definidas como “soluciones jurisdiccionales urgentes, autónomas, despachables “inaudita et altera pars” y mediando una fuerte probabilidad de que los planteos formulados sean atendibles” (Cf. Conclusiones del XIX Congreso Nacional de Derecho Procesal, realizado en Corrientes en 1997, ídem. C.Civ. y Com. Rosario, Sala 3, mayo 5 de 1997, M.L.N. c. R.C., La Ley, 1997-F, 433; Peyrano, Jorge W. “Reformulación de la teoría de las medidas cautelares: tutela de urgencia. Medidas Autosatisfactivas”) (Cfr. esta Sala, Expte. 66443/2014 “Incidente N° 2 - ACTOR: STOLA, ENRIQUE OSCAR DEMANDADO: GOOGLE INC. s/art. 250 CPC, junio de 2016).

Ciertamente, estas medidas se refieren a casos excepcionales donde es necesario obtener prontamente la satisfacción de una pretensión, ello ante una urgencia tal que no es posible aguardar la tramitación de ningún proceso, por más sumarísimo que éste sea.

Se configura entonces y de admitirse, una tutela jurisdiccional cuya finalidad estriba no en asegurar el objeto del proceso o la eficacia de la sentencia, función típicamente cautelar, sino en adelantar total o parcialmente la pretensión contenida en la demanda cuando de la satisfacción de tal pretensión urgente deriva un perjuicio irreparable (conf. Gozáini, Osvaldo A., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado”, ed. La Ley, t. I, pág.564). SALA E 7777/2021 A, M E c/ B, L J s/MEDIDAS PRECAUTORIAS Buenos Aires, 5 de marzo de 2021). (Cfr. CNCiv. Sala E, Expte. 7777/2021 “A, M E c/ B, L J s/MEDIDAS PRECAUTORIAS”, 5 de marzo de 2021).

Ahora bien, delimitado el marco regulado aplicable al caso, cabe señalar que, atendiendo a los requisitos necesarios para hacer viable la pretensión, en los términos de la normativa apuntada “supra”, entendemos que aquéllos no confluyen.



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA D

Al respecto, se requieren una serie de presupuestos. En primer lugar la amenaza de daño, la existencia de una razonable probabilidad de ocurrencia de un daño, lo que supone la carga de la acreditación del interés legítimo amenazado por parte del reclamante individual. Asimismo, debe detectarse una conducta antijurídica, cuyo quid radica no sólo en no hacer algo cuando la ley obliga a realizar una acción, sino que aquí la conducta omitida es exigible de acuerdo con la totalidad del ordenamiento, el orden público, la buena fe y el abuso de derecho. Por otro lado, la existencia de una relación de causalidad adecuada, que impone acreditar la existencia de previsibilidad de ocurrencia de un perjuicio y, por último, la posibilidad material de detener la potencial causación del daño, de lo contrario, si no existiera tal posibilidad, ningún sentido tendría la acción preventiva, ya que quedaría solo por acudir a la tutela resarcitoria, a fin de que el responsable del perjuicio indemnice a la víctima el daño injustamente sufrido por ella (Cfr. esta Sala, Expte. 22.101/2022 “A., K., M. J. c/A., C. y otros s/Medidas Precautorias” 19-05-22).

En este contexto se ha dicho que, como importa una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, resulta justificada una extrema prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión (Cfr. CNCiv. Sala E, c.5151.804 del 9-10-08).

Dentro de este contexto, conforme a los hecho narrados y elementos de ponderación incorporados habrá de evaluarse el recurso introducido, y obtener un equilibrio de los derechos en pugna, es decir aquellos invocados por el apelante por sobre el de libertad de expresión, concatenado en el caso, con los derechos de una asociación gremial (cfr. art. 14 bis de la Constitución Nacional), en este supuesto, realizando una denuncia pública vinculada a difundir información y visibilizar un supuesto conflicto laboral. Veamos

En lo que respecta al derecho a la imagen, éste es emanación de un derecho personalísimo, cuya tutela, como el derecho al honor o la intimidad, es autónoma y forma parte con aquellos de una categoría amplia: el derecho a la integridad espiritual.



La imagen de una persona, por otro lado, es protegida en forma autónoma, aun cuando también puede o no ella ser sustento de un ataque al honor o su intimidad (ver esta sala “González, M.A. c/ Electronic System SA; s/ordinario” del 17/11/2009; ídem Sala C, “Grondona, Carlos c/Radio Victoria S.A., del 6-5-1982, en ED 99-714; Kemelmajer de Carlucci, A., en Belluscio-Zannoni, Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, 2002, Astrea, 3era.reimpresión, T 5, pág. 81 y sus citas; Rivera, Julio César, "Hacia una protección absoluta de la imagen personal. Comentarios sobre la jurisprudencia nacional y francesa", Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Año I, 1988, n°1, pág.36 y sgtes.; Hooft, Irene, “La protección de la imagen”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzel-Culzoni, 2006-2, pág.337).

Sobre el particular, la doctrina mayoritaria concibe al derecho a la imagen como aquel que protege de las agresiones a la integridad espiritual de la persona, con el objeto de impedir el avasallamiento de la manifestación externa o visible de la personalidad humana en cualquiera de sus formas (reproducción o captación de alguna parte del cuerpo, de la voz, de los gestos, utilizando para ello cualquier medio como fotografía, escultura, imitación, filmación, grabación, etc.) (Rivera Julio C-Crovi Luis Daniel, Derecho Civil-Parte General, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016, pág 414; Borda, Guillermo A, Tratado de Derecho Civil-Parte General, La ley, Buenos Aires, 2008, T. I págs..324/5; Cifuentes, Santos, Derechos personalísimos, Astrea, Buenos Aires, 1995, pág. 513; Fissore, Diego M., “Los derechos de la personalidad espiritual en el CCCN”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzel Culzoni, Santa Fe, 2015-3, pág. 153; Hooft, Irene, “La protección de la imagen”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzel Culzoni, Santa Fe, 2006-2, pág. 337/8; Gregorini Clusellas Eduardo L, “La violación del Derecho a la propia imagen y su reparación”, LL 1996-D-136; Cobas, Manuel O., “La divulgación de la imagen de una persona sin su consentimiento como presupuesto del hecho ilícito y el daño indemnizable”, DJ05/12/2012, 18; Crovi, Luis Daniel, “En resguardo de la imagen y de la ganancia perdida”, JA 2005-II325;





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA D

Bustamante Alsina, Jorge, "Responsabilidad civil por violación del derecho a preservar la propia imagen", ED 171-94; LLambías, J.J., Tratado de Derecho Civil- Parte General, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1970, T I, pág. 254; Ghersi, Carlos A., "Derecho personalísimo a la imagen", Derechos personalísimos, Thomson Reuters, 2015; Lanata, Alejandro, "El derecho a la imagen y los deportistas, SJA 2017/08/23; Laplacette, Carlos J, "Fotografías, retratos y libertad de expresión", DJ 19/06/2013,3; Picasso, Sebastian, "Nuevas fronteras del derecho a la Imagen", JA 2005-II-1251; Lovece, Graciela, "El derecho personalísimo a la propia imagen", 18/2/ 2008, MJ-DOC-3360 -AR | MJD3360; Márquez, José Fernando, "La doctrina de la real malicia y la violación del derecho a la imagen", LL 2012-B, 109).

Así las cosas, y desde otro sector de evaluación, no puede discutirse que la libertad de expresión es la piedra angular de la existencia misma de una sociedad democrática, es por eso que tanto nuestra Carta Magna (art. 14) como la mayoría de los tratados internacionales, contempla y ampara la libertad de expresión y de información, condenando cualquier tipo de censura previa, concretamente, el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (llamada comúnmente Pacto de San José de Costa Rica) cuya jerarquía constitucional establece el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional prohíbe categóricamente la censura previa al establecer en su inciso 1° que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.

Indudablemente, el reconocimiento legal de la libertad de expresión del pensamiento configura una de las conquistas más importantes que el hombre obtuvo en su permanente lucha por la dignidad.

Con mayor razón en un sistema democrático constitucional que presupone la coexistencia de una pluralidad de opiniones en la sociedad, de diversos conceptos, juicios e ideas que concurren a dar su contenido a las opiniones de los grupos sociales. En cambio, la uniformidad en las ideas y opiniones, fruto de las restricciones impuestas a la libertad de expresión, solamente se concibe en un sistema autoritario y paternalista, que establece la obediencia incondicional del intelecto de los hombres a la única



opinión posible; la de los detentadores del poder, que asume el carácter de verdadero dogma (Badeni, Gregorio, Tratado de Libertad de Prensa, LexisNexis, Abeledo Perrot, pág. 17).

Y si bien no se propicia el carácter absoluto de la libertad de expresión, ya que en nuestro sistema (art. 14 CN) debe ser ejercida de acuerdo con la legislación reglamentaria y respetando los límites resultantes del art. 19 de la CN, tal reglamentación no puede acarrear una restricción que importe la desnaturalización del derecho (art. 28 CN) o la aplicación de límites específicos (art. 32 CN) (conf. Aut. Cit. “La libertad de expresión en el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación”, El Derecho -24-05-2013).

Luego, frente al conflicto entre la libertad de expresión y los derechos personalísimos, entendemos que la controversia debe dilucidarse sobre el caso concreto, por ello se habla de una jerarquía móvil (ver Oscar Flores, Libertad de prensa y derechos personalísimos: criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, “Honor, imagen, e intimidad”, T 2006-2, pág.305 y sgtes.; Ricardo Guastini, Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del Derecho. Gedisa, Barcelona, 2000, pág.171), sin disquisiciones dogmáticas a priori, o en abstracto, adoptando una postura doctrinaria moderada consistente en contrapesar las diferentes circunstancias susceptibles de valoración jurídica (conf. entre otros Ramón D. Pizarro, Responsabilidad civil de los medios masivos de comunicación. Daños por noticias inexactas o agraviantes, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1991, pág.111; y jurisprudencia concordante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re “Ponzetti de Balbín, I c/ Editorial Atlántida S.A.”, “Campillay, Julio C. c/La Razón, Crónica y Diario Popular”; “Costa, H. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y otros”; “Portillo, A.”; entre otros).- (esta Sala, 99838/2001 – “LETANU, ALFREDO RAUL c/ BASUALDO, JOSE HORACIO Y OTROS”. 21-08-24).

En esta línea de pensamiento, Segundo Linares Quintana enseña que el concepto constitucional de censura previa es amplio y comprensivo, y designa toda acción u omisión dirigida a dificultar o imposibilitar, en forma directa o indirecta,



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA D

mediata o inmediata, la publicación y circulación de la palabra, impresa o por cualquier otro medio de difusión. Por lo tanto, además de la censura previa propiamente hablando, queda interdicta por la ley suprema argentina toda otra forma de restricción comprendida en los términos expuestos.

Asimismo, consideramos además, que cuando lo publicado se relaciona con funcionarios públicos, figuras públicas o asuntos de interés público, la pretensiones como la que se encuentra sujeta a tratamiento, cede ante los demás derechos antes aludidos.

Así pues, a criterio de los suscriptos, no se encuentran reunidos los requisitos para acceder a la medida peticionada, puesto que una solución como la adoptada dentro de este ámbito provisional importaría una limitación al derecho a la información y a la libertad de expresión. Más aún, si se tiene en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el *“abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo, sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido”* (opinión consultiva OC-5,13/11/85, C.I.D.H., Ser.A, N° 5, 1985). (cfr. esta Sala Expte. 42958/2014 Incidente N° 1 “L., E. R. y otro c/ E. P. SA y otros s/ART. 250 C.P.C. - INCIDENTE CIVIL” agosto de 2018).

Al respecto, la Corte Suprema ha requerido que toda restricción, sanción o limitación a la libertad de expresión debe ser de interpretación restrictiva (fallos 316:1623) y que toda censura previa que sobre ella se ejerza padece de una alta presunción de inconstitucionalidad (fallos 315:1943). Es por ese motivo que a lo largo de los precedentes referidos al derecho constitucional a la libertad de expresión, el Tribunal se ha inclinado, como principio, a la aplicación de las responsabilidades ulteriores a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, sea por la comisión de delitos penales o actos ilícitos civiles (fallos 119:231; 155:57; 167:121; 269:189; 310:508, entre muchos otros), que sólo podrían ceder frente a supuestos absolutamente excepcionales (fallos: 324:975) (Cfr. CNCiv., Sala G, Expte. 30.266/2024 “M. A., C. J. c/S. C., P.N s/Medidas Precautorias”, 2-07-24).



Compartimos por lo demás, las conclusiones del señor juez de grado, en punto a que en este marco, si bien las manifestaciones vertidas en los panfletos resultarían acusaciones severas, no pueden prohibirse ese tipo de difusión, máxime en circunstancias de público conocimiento, tales como la exposición de los funcionarios públicos y los magistrados, sujeta al escrutinio público.

Sin perjuicio de la forma como se decide el conflicto, y más allá que la medida requerida no puede prosperar debido a que no resulta factible cercenar la libertad de expresión -en el caso ejercido además por una asociación gremial con amparo en la Constitución Nacional-, cabe remarcar que, eventualmente, la situación descripta podría acarrear responsabilidad subsiguiente, para aquellos que incurran en un ejercicio abusivo del referido derecho constitucional que hoy se impone.

Como corolario de todo lo expresado y no hallando en el memorial a estudio ningún fundamento que logre refutar las conclusiones esgrimidas en el decisorio en crisis, no cabe más que desestimar los agravios allí esbozados, confirmando el pronunciamiento en todo cuanto ha sido materia de apelación, **ASI SE DECIDE**. Hágase saber que la presente resolución será remitida a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la CSJN a los fines de su publicación (Acordada CSJN 10/25). Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase.

Gabriel G. Rolleri

Maximiliano L. Caia

Juan Manuel Converse